

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3º Juzgado de Letras de la Serena
CAUSA ROL : C-2020-2019
CARATULADO : ARELLANO PAZ RAUL ERNESTO/SALAZAR
DURAN MAURICIO JAVIER

La Serena, diecinueve de Marzo de dos mil veinte

Vistos.

En presentación de fecha 1 de julio del año 2019, rectificada el día 4 del mismo mes, comparece el abogado **Axel Cortés Serín**, domiciliado para estos efectos en avenida Presidente Eduardo Frei Montalva número 901, oficina 103, Edificio Centro Empresarial, sector Barrio Industrial, de la comuna de Coquimbo, en representación de don **Raúl Ernesto Arellano Paz**, empresario, de su mismo domicilio, interponiendo demanda de cumplimiento forzado de contrato con indemnización de perjuicios contra don **Mauricio Javier Salazar Duran**, ingeniero civil, domiciliado en calle Alejandro Daud Noemí número 3031, comuna de La Serena, en virtud de los siguientes argumentos.

Refiere que por instrumento privado de fecha 12 de octubre del año 2017, protocolizado bajo el número 6986-2017 en la Cuarta Notaría de La Serena, servida por don Rubén Reinoso Herrera, su representado vendió y cedió al demandado la cantidad de 480 acciones de la sociedad “SyC Gastronomía SpA” en la cantidad de \$48.000.000, que constituía la totalidad de su participación accionaria.

Agrega que la suma pactada debía pagarse por el demandado, a más tardar, el día 12 de octubre del año 2018. No obstante, ello nunca ocurrió. Por su parte, Raúl Ernesto Arellano Paz cumplió cabalmente la obligación de transferir las acciones objeto del contrato.



Foja: 1

Por lo anterior, alega que en la especie concurren todos los presupuestos para ejercer la acción de cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios, prevista en el artículo 1489 del Código Civil, a saber:

i. Que se trate de un contrato bilateral.

Sin lugar a dudas el contrato de compraventa celebrado entre las partes es bilateral en los términos del artículo 1439 del Código Civil, pues ambas partes, vendedor y comprador, se han obligado recíprocamente. Evidentemente, era la obligación principal del comprador pagar el precio de la cosa objeto del contrato -480 acciones de la sociedad SyC Gastronomía SpA-, cuestión que no realizó.

ii. Que exista un incumplimiento imputable al demandado.

Como ha expuesto, el demandado incumplió su obligación de pagar el precio de las acciones que compró, ascendente a \$48.000.000.

iii. Que, a su vez, el demandante haya cumplido o este llano a cumplir su obligación.

Describe que las acciones que su mandante vendió y cedió al demandado, dejaron de estar en el patrimonio del actor al momento de suscribir el contrato tantas veces citado, de forma que su obligación de entregar la cosa, se encuentra cumplida. A mayor abundamiento, hoy el único accionista de “SyC Gastronomía SpA”, es el demandado.

Sin perjuicio de lo anterior, alega que el demandado está en mora, a la luz de lo prescrito por el artículo 1551 número 1 del Código Civil, pues el pago debió efectuarse a más tardar el 12 de octubre del año 2018, sin que ello ocurriera.

En lo relativo a la indemnización pedida, por concepto de daño emergente, esto es, el pago de la cantidad de \$48.000.000, suma que corresponde a la cantidad de dinero que debió pagar el demandado como contraprestación a la venta y cesión de las acciones de la SpA, tantas veces señalada. Dicha suma, deberá reajustarse de acuerdo a la variación que



Foja: 1

haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor desde el día en que debió pagarse hasta el día del pago efectivo.

Asimismo, afirma que producto del incumplimiento del demandado su representado se ha visto enfrentado a una crítica situación, pues, como reconocido empresario en la región, tenía participaciones accionarias en diversas personas jurídicas de derecho privado, con fines de lucro, especialmente a través de figuras tales como la franquicia y la distribución mercantil. Así, las acciones vendidas y cedidas a través del contrato ya tantas veces mencionado, corresponden a la franquicia en la región de “Johnny Rockets”, afamada marca de comida norteamericana.

Alega que la pérdida del ingreso patrimonial esperado por la venta de su paquete accionario en la SpA, no solo produjo un detrimento económico para su mandante al dejar de percibir los \$48.000.000, sino que le quedó vedada la posibilidad de seguir obteniendo ingresos por la franquicia ya señalada, lo que será tratado más adelante, al referirnos al lucro cesante.

Volviendo al daño moral, indica que la no percepción de estos \$48.000.000 provocó que su mandante entrara en cesación de pagos con diversos acreedores, especialmente del área bancaria, lo que se ha traducido en que, al día de hoy, exista un sinnúmero de juicios ejecutivos en su contra. Así por ejemplo, su mandante corre serios riesgos de perder el hogar donde vive con su mujer y sus hijos y de perder los inmuebles que había adquirido durante varios años. Si el demandado hubiese dado total y acabado cumplimiento a sus obligaciones, nada de esto hubiese sucedido.

Además, indica que su mandante ha caído en el Boletín Comercial DICOM, cuestión que le ha impedido acceder a trabajos con condiciones similares al resto de los ingenieros comerciales (su profesión), lo que ha agravado más la situación.

Sostiene que los malestares descritos han provocado que su representado deba acudir a controles médicos físicos y mentales, puesto que su salud, se ha visto gravemente deteriorada, incluso a niveles psiquiátricos, estando actualmente en un cuadro de depresión mayor, tal como se acreditará en la etapa procesal que corresponda.



Foja: 1

Finalmente, avalúa estos malestares y perjuicios extra patrimoniales en la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos).

Respecto al lucro cesante, menciona que a raíz del incumplimiento del demandado su representado se ha visto vedado de la posibilidad de obtener los ingresos que percibe la sociedad “SyC Gastronomía SpA”, suma que según información contable de la empresa, asciende a un promedio de utilidad líquida de \$150.000.000 anuales.

Finalmente, previas citas legales, solicita se sirva tener por interpuesta demanda de cumplimiento forzado de contrato con indemnización de perjuicios, en procedimiento ordinario, en contra de Mauricio Javier Salazar Duran, ya individualizado, acogerla a tramitación y en definitiva declarar:

1. Que el señor Mauricio Javier Salazar Duran incumplió el contrato de compraventa o cesión de acciones suscrito con Raúl Ernesto Arellano Paz con fecha 12 de octubre del año 2017, protocolizado en la Cuarta Notaría de La Serena, servida por don Rubén Reinoso Herrera, bajo el número 6986-2017.

2. Que, en consecuencia, se condena al demandado al cumplimiento forzoso del contrato de referido en el número precedente, quedando obligado, por consiguiente, a las siguientes prestaciones en favor de Raúl Ernesto Arellano Paz:

2.1. Al pago del precio ascendente a la cantidad de \$48.000.000, cantidad que deberá pagarse debidamente reajustada de acuerdo a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor desde el día en que debió pagarse hasta el día del pago efectivo.

2.2. Al pago de la cantidad de \$170.000.000, por concepto de indemnizaciones.

3. Que se condena al demandado al pago de las costas de la causa.

En resolución de fecha 17 de septiembre del año 2019, a folio 24 del cuaderno principal, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía del demandado.



Foja: 1

Mediante escrito de fecha 25 de septiembre del año 2019, a folio 25 del mismo cuaderno, se evacuó el trámite de la réplica por el demandante, quien reiteró todo lo expuesto en su demanda.

Por escrito de fecha 2 de octubre del año 2019, a folio 27 del cuaderno principal, comparece el abogado **Alex Moreno Varela**, en representación de **Mauricio Javier Salazar Duran**, ingeniero civil, ambos con domicilio para estos efectos en calle Colón N°370, comuna y ciudad de La Serena, evacuando el trámite de dúplica en los siguientes términos.

En primer lugar, niega que en la especie concurren los requisitos que hacen procedente el cumplimiento forzoso del contrato, así como la existencia del daño y su cuantía.

Particularmente, expone que de la lectura del contrato referido, específicamente su cláusula segunda, se tiene que la “...transferencias de las acciones se haría efectiva por medio de la inscripción de la cesión en el Registro de Accionarios de la Sociedad, debidamente suscripto por las Partes.” De esta manera, al tenor de lo acordado por las partes en la escritura de cesión, el demandante no ha dado cumplimiento a su obligación ni ha estado llano a hacerlo, pues los señores Arellano y Salazar no confeccionaron el referido registro y nunca inscribieron la cesión en el mismo, a fin de hacer efectiva la transferencia de aquellas.

A mayor abundamiento, agrega que a la época de suscribirse el contrato, respecto de quienes ostentaban la calidad de administradores conjuntos de la mencionada sociedad, esto es, el señor Arellano y el señor Salazar, pesaban las mismas obligaciones contenidas en el artículo 431 del Código de Comercio, referente a: 1° Llevar el Registro de accionistas de la sociedad; y 2° Materializar cualquier inscripción relacionada a la transferencia, gravamen y/o limitación al dominio, que afecte a las acciones sociales.

En razón de lo anterior, indica que resulta palmaria la situación del contrato no cumplido y falta de mora que prevé los artículos 1552 y 1537 del Código Civil, respectivamente; por consiguiente la contraria no se encuentra en posición de demandar el cumplimiento forzado de la



Foja: 1

obligación, pues no ha cumplido ni se ha estado llana a cumplir en el tiempo estipulado en el contrato.

Por otra parte, alega la incompetencia del tribunal para resolver la controversia de marras, pues tanto el cedente como el cesionario ostentaban la calidad de accionistas de la Sociedad SyC Gastronomía SpA., cuyo estatuto social establece la forma en que se han de resolverse las controversias existentes entre los socios o accionistas, a saber: “Artículo noveno: Resolución de diferencias: Las diferencias que ocurran entre los accionistas, los accionistas y la sociedad o sus administradores o liquidadores, y la sociedad o sus administradores o liquidadores, serán resueltas por un árbitro de derecho, designado de la siguiente forma: El árbitro será designado por el tribunal de justicia del domicilio social.” Todo lo cual está en plena concordancia con lo dispuesto por el artículo 441 del Código de Comercio.

Así, arguye que este tribunal es del todo incompetente para conocer el litigio de marras, no solo porque así las partes lo han pactado en el estatuto social, sino que también por expresa disposición legal, debiendo ventilarse el litigio ante un árbitro designado por la justicia ordinaria.

En audiencia de fecha 23 de octubre del año 2019, ante la inasistencia del demandado, se llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo.

Por resolución de fecha 28 de octubre del año 2019, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

En resolución de fecha 22 de enero del presente año, se citó a las partes a oír sentencia.

Considerando:

I. De las tachas.

Primero. Que el demandado opuso tacha contra los testigos Pablo Ramírez Inostroza y Enzo Cerda Albornoz, ofrecidos por el demandante en



Foja: 1

audiencia de 28 de noviembre de 2019, por la causal del número 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, a saber, por existir una relación de amistad entre éstos y la parte que los presentó, demostrada en que realizan actividades recreativas juntos, como participar en la misma banda musical, y en que se conocen desde hace ya tres años.

Además, al testigo Enzo Cerda Albornoz lo tachó por la causal del número 6 del artículo 358 del Código citado, basado en que de sus propias declaraciones se desprende que existe un interés indirecto en los resultados del juicio.

Segundo. Que, por su parte, el demandante evacuó traslado a las tachas por la causal del número 7 del artículo 358 y solicitó su rechazo, basado en que los testigos expresamente descartaron que exista una relación de amistad con él y porque la circunstancia de pasar tiempos recreativos en común, como tocar en la misma banda, no configura una amistad íntima como requiere la causal invocada.

A la tacha por la causal del número 6, contestó que la declaración de Cerda Albornoz no evidencia la existencia de algún interés económico, directo o indirecto, en el desenlace del juicio; es más, reconoce que es “mera curiosidad”.

Tercero. Que pasando a resolver las tachas formuladas, cuyo fallo se dejó para definitiva, cabe mentar que la causal de inhabilidad del artículo 358 número 7 del Código de Procedimiento Civil requiere que la relación de amistad entre el testigo y la parte que lo presenta sea íntima, esto es, muy estrecha o de gran confianza, manifestada en hechos concretos y claros.

En este sentido, el testigo Pablo Ramírez declaró, a las preguntas de tacha, que la solicitud de Raúl lo motivó a declarar en juicio, pues estaban en conversaciones acerca del tema; agregó que tiene una relación de conocidos con el demandante de autos y que se conocen desde hace tres años más o menos, pues tocan en una banda musical con otros amigos.



Foja: 1

De otro lado, Enzo Cerda refirió, a las mismas preguntas, que le interesa el resultado del juicio por lo sucedido con Raúl y porque Mauricio Salazar es conocido en la región; quiere saber “a qué se llega, porque Raúl es el afectado”. Agregó que conoce a Raúl Arellano desde hace tres años “con suerte” y tienen una relación de “amistad de música”, “nos juntamos a tocar no más, no en casas, sólo en estudios de música” (sic).

Cuarto. Que a juicio de esta sentenciadora las declaraciones de los testigos presentados por el demandante revelan la existencia de una amistad íntima con don Raúl Arellano, a pesar que éstos expresamente lo niegan e intentan catalogar su relación como de conocidos; lo cierto es que al reconocer que comparten tiempos recreativos juntos, en la participación de una banda musical “con otros amigos”, y que lo conocen desde hace tres años aproximadamente, dan cuenta que su relación no es superficial, pues comparten un hobby juntos. Por esta razón, procede acoger las tachas deducidas contra don Pablo Ramírez Inostroza y Enzo Cerda Albornoz, por la causal del número 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil; siendo inoficioso, por lo tanto, emitir un pronunciamiento sobre la tacha formulada contra este último por la causal del número 6 del mismo artículo.

II. Del fondo.

II.1. Acciones y excepciones.

Quinto. Que, en estos autos, don Raúl Ernesto Arellano Paz demanda cumplimiento forzado de contrato con indemnización de perjuicios contra don Mauricio Javier Salazar Duran, fundado en que éste incumplió el contrato de cesión de acciones suscrito con fecha 12 de octubre del año 2017, solicitando se le condene a pagar el precio de las acciones vendidas por la suma de \$48.000.000, debidamente reajustada según la variación que haya experimentado el IPC; más las indemnizaciones de perjuicios causados con su incumplimiento, por las cantidades y conceptos señalados en lo expositivo del fallo.

Sexto. Que la demanda se tuvo por contestada en rebeldía del demandado, por lo que ha de entenderse que éste controvierte cada uno de



Foja: 1

los hechos aseverados por el actor, operando lo que en doctrina se denomina como contestación ficta de la demanda.

Sin perjuicio de lo anterior, al evacuar la dúplica, don Mauricio Javier Salazar Duran opuso, en primer término, la excepción de contrato no cumplido, fundada en que el demandante no le transfirió las acciones compradas en la forma y el plazo convenido, por lo que la mora del actor purgaría la mora que se le imputa, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1552 y 1537 del Código Civil. Dicho esto, alega también la incompetencia del tribunal para resolver la controversia de marras, pues tanto el cedente como el cesionario ostentaban la calidad de accionistas de la Sociedad SyC Gastronomía SpA, cuyo estatuto social prevé en su artículo noveno que las diferencias que ocurran entre los accionistas serán resueltas por un árbitro de derecho y no por la justicia ordinaria.

II.2. La prueba.

Séptimo. Que para acreditar sus dichos el demandante rindió la siguiente prueba documental.

En lo principal del escrito de fecha 29 de noviembre 2019, a folio 53.

1. Certificado de antecedentes comerciales del Boletín Comercial de Cámara de Comercio de Santiago, del demandante Raúl Arellano Paz, de fecha 28 de noviembre de 2019.
2. Constitución de “SyC Gastronomía SpA” de fecha 22 de abril de 2015, ante el Registro de Empresas del Ministerio de Economía.
3. Modificación de la sociedad “SyC Gastronomía SpA” de fecha 17 de marzo del 2017.
4. Modificación de la sociedad “SyC Gastronomía SpA” de fecha 21 de noviembre de 2017.
5. Copia de la protocolización de la Segunda Junta Accionistas de la sociedad “SyC Gastronomía SpA”, ingresada al repertorio número



Foja: 1

7175-2017 con fecha 20 de octubre de 2017, en la Cuarta Notaría Pública de La Serena.

6. Compraventa o cesión de acciones de la sociedad “SyC Gastronomía SpA”, de fecha 12 de octubre de 2017, ingresada al repertorio número 6986-2017 con fecha 12 de octubre de 2017, en la Cuarta Notaría Pública de La Serena.
7. Certificado de vigencia de accionistas de la sociedad “SyC Gastronomía SPA”, de fecha 30 de octubre de 2017, ingresada al repertorio número 7381-2017 en la Cuarta Notaría Pública de La Serena.
8. Acta de remate de fecha 23 de septiembre de 2019, en causa C-4063-2017 del Tercer Juzgado de Letras de La Serena, en que se subastó una propiedad de su representado.
9. Acta de remate de fecha 16 de octubre de 2019, en causa C-2960-2017 del Primer Juzgado de Letras de La Serena, en que se subastó una propiedad de su representado.

Octavo. Que, por su parte, el demandado rindió la siguiente prueba documental.

En el segundo otrosí del escrito de fecha 29 de noviembre del año 2019, a folio 54.

1. Escritura electrónica de constitución la Sociedad SyC Gastronomía SpA, de fecha 22 de abril del año 2015, emitida con fecha 29 de noviembre del año 2019.

2. Escritura electrónica de la primera modificación de la Sociedad SyC Gastronomía SpA, de fecha 17 de marzo del año 2017, emitida con fecha 29 de noviembre del año 2019.

3. Escritura electrónica de la segunda modificación de la Sociedad SyC Gastronomía SpA, de fecha 21 de noviembre del año 2017, emitida con fecha 29 de noviembre del año 2019.



Foja: 1

Noveno. Que por resolución de fecha 13 de marzo del año en curso, se decretó la medida para mejor resolver del número 1 del artículo 159 del Código de Procedimiento Civil; agregando a los autos, con citación, los documentos exhibidos por la demandada en audiencia de fecha 12 de diciembre del año 2019, a folio 69 del cuaderno principal, consistentes en balances generales correspondientes al año 2015, 2016, 2017 y 2018, así como las declaraciones anuales de renta –formulario 22- correspondientes al año 2017, 2018 y 2019; todos correspondientes a la sociedad SYC Gastronomía SpA. Medida que se tuvo por cumplida en resolución de fecha 18 de marzo del año en curso.

Décimo. Que en audiencia de fecha 23 de diciembre del año 2019, agregada a folio 84 del cuaderno principal, don Mauricio Javier Salazar Duran rindió absolución de posiciones al tenor del pliego que la precede. Confesional que por haberse rendido fuera del término probatorio fue considerada como medida para mejor resolver, en resolución de fecha 13 de marzo del presente año, por cumplida el 18 de marzo recién pasado.

Undécimo. Que, por último, se decretó como medida para mejor resolver el informe pericial evacuado por la perito psicóloga Carmen Mendieta en fecha 17 de enero del año en curso, agregado a folio 97 del cuaderno principal. Medida que se tuvo por cumplida en resolución de fecha 18 de marzo del año en curso.

La perito concluyó que “Raúl se ha mostrado sincero durante el proceso de evaluación, mostrando actitudes colaboradoras en todo momento, proporcionando cuanta información le fue solicitada, se descarta la simulación, opinión profesional que se basa en los datos proporcionados en la entrevista llevada a cabo, y el análisis de las pruebas aplicadas, además de la observación documental, siendo consistentes.

Respecto a una posible manipulación de los síntomas registrados, se descarta cualquier actitud de simulación, sobre simulación o disimulación, por las siguientes razones: el peritado muestra un cuadro que encaja en el curso y evolución de una psicopatología habitual, no muestra sintomatología estrafalaria, no realiza una sobreactuación clínica, no presenta una



Foja: 1

personalidad antisocial, ofrece un testimonio estable, los hechos son narrados y vivenciados (consistencia entre el lenguaje verbal y no verbal, se observa afectación emocional), lo que es concluyente con los instrumentos usados. [...]

La causa de las manifestaciones psicológicas; depresión reactiva, severa, problemas de ansiedad e inseguridades, se ubica en la influencia directa de los problemas o desavenencia que ha tenido que sortear el periciado con su familia con respecto al impacto que tuvieron los hechos demandados, incidiendo directamente en su calidad de vida, invirtiendo no sólo sus ahorros, sino que también su credibilidad y responsabilidad crediticia. Las repercusiones van más a la de la incertidumbre de ganancia o pérdida legítima que pudo haber experimentado la sociedad, por el contrario, la sensación de injusticia, frustración e impotencia deriva directamente de la exclusión de su participación pese a haber aportado todo su capital y sin recibir a la fecha el pago de las acciones que vendió.

Los resultados obtenidos en la evaluación, por Raúl, constituyen elementos consistentes con una depresión reactiva, severa, en respuesta a un factor o factores identificables, es decir el detonante es una serie de eventos del contexto, en este caso, con relación a que no obtuvo como contrapartida el pago de las acciones; no obtiene respuestas satisfactorias por parte de los responsables, pues solo lo afectó de manera personal, sino que esta afectación involucró las relaciones familiares, sociales, económicas y laborales, afectó severamente su vida cotidiana.

Raúl estuvo sometido a eventos estresores, (según la investigación y evaluación llevada a cabo) lo que generó en el informado una respuesta psicológica, emocional y conductual que dan cuenta de una alteración de la salud mental, provocando secuelas psicosomáticas, manifestada en depresión reactiva, de carácter severa, la que se mantiene hasta la actualidad, que de no ser tratada puede ser crónica, incluso poner en riesgo su vida, todo ello afecta diversas áreas de su vida, interfiriendo en su vida cotidiana y en las distintas relaciones sociales que éste despliega en su diario vivir.



Foja: 1

Dados todos los antecedentes expuestos, es posible concluir que: Existe una psicopatología, si bien existen antecedentes previos y que serían conocidos por lo responsable, este cuadro de depresión se ve severamente agudizado con motivos del incumplimiento del contrato, lo que se ha sostenido en el transcurso del tiempo, pues hasta el día de hoy no hay un arrepentimiento, o rectificación de la conducta, por lo que continua irradiando a todas las esferas de su vida, provocando desajustes en: el ámbito económico, laboral, salud mental, física, familia, recreación, lo que constituye daño psíquico y emocional. Adicionalmente al incumplimiento de quién es el demandado en la causa, reproche moral por lo que estima como una traición, éste tampoco le ha pagado las acciones que le vendió, de forma que Raúl no cuenta con ese dinero para hacer frente a sus obligaciones económicas y las de su familia. Examinado posee factores protectores que le han permitido sortear al menos parcialmente la crisis generada por el incumplimiento del socio que no paga las acciones de la sociedad.

Existe una relación directa entre los hechos que motivan la causa, con el cuadro de depresión severa y aguda que enfrenta y padece Raúl.

El peritado requiere psicoterapia por un lapso estimado de a lo menos tres años, la que debiera ser a lo menos una vez a la semana, complementado con atención psiquiátrica y apoyo farmacológico. De no ser tratado su calidad de vida se puede seguir empeorando, por ejemplo el aumento de peso, a raíz de la sintomatología ansiosa, puede acarrear a la vez otros problemas de salud física, el sentimiento de frustración, decepción, que se ha visto afectado puede incrementarse llegando incluso a ser de manera permanente, arriesgando su vida, lo que queda de manifiesto por parte del informado, y que ha sido refrendado por antecedentes familiares de suicidio (padre realiza dos intentos y una tía logra el suicidio efectivo).

En el ámbito de relaciones familiar, aumenta su preocupación pues su familia y en especial sus hijos, pues han debido de cambiar de ambiente, jardín, incluso desprendiéndose de sus pertenencias. Finalmente, su cuadro depresivo fue somatizado a través del sueño, pues dormía a saltos, producto de la preocupación, y tenía sueños con respecto al tema, teniendo



Foja: 1

pensamiento rumiativos en relación a la alta judicialización de diversos cobros.

Es importante señalar que los aspectos relevantes en el caso de marras, radica en como el periciado ha percibido todo lo sucedido con respecto, pues entiende el peritado que habría una intención dolosa detrás de todo el incumplimiento contractual.

El informado si bien posee antecedentes de morbilidad, se ha mantenido resiliente a lo largo de toda su trayectoria vital, llevando una vida estable, formando una familia y teniendo un funcionamiento normal, siendo este evento el que desemboca la crisis, lo sucedido ha generado en él un cuadro de depresión, pues se sintió vulnerado en sus derechos, al experimentar las secuelas directas de un mal deliberado incumplimiento.

Esta perito concluye que efectivamente el peritado sufrió daño moral, psicológico producto de los hechos demandados, y acredita la ocurrencia de consecuencias morales en los hechos acaecidos en el periciado.”

II.3. De la excepción de incompetencia.

Duodécimo. Que sin perjuicio que el demandante formuló esta cuestión al final de su escrito de dúplica, es menester emitir un pronunciamiento sobre la excepción de incompetencia formulada por éste, antes de entrar a conocer el fondo de la acción de cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios.

Décimo tercero. Que la incompetencia deducida se basa en que éste sería un conflicto entre accionistas de la sociedad SyC Gastronomía SpA., y que al tenor de su estatuto social, específicamente, del artículo noveno, debiera ventilarse ante un árbitro de derecho y no conocerse por la justicia ordinaria.

Décimo cuarto. Que según lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, es carga del demandado probar los supuestos fácticos que sustentan la excepción de incompetencia incoada, a saber, que las partes del juicio son accionistas de la sociedad por acciones SyC Gastronomía SpA y que el conflicto de marras deviene de dicha posición.



Foja: 1

Décimo quinto. Que la escritura de constitución de la sociedad por acciones SyC Gastronomía SpA, de fecha 22 de abril del año 2015, ante el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades, en su calidad de instrumento público en juicio del acuerdo al número 6 del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, valorado según lo dispuesto en el 1700 del Código Civil, acredita fehacientemente que “Las diferencias que ocurran entre los accionistas, los accionistas y la sociedad o sus administradores o liquidadores, y la sociedad o sus administradores o liquidadores, serán resueltas por un árbitro de derecho, designado de la siguiente forma: El árbitro será designado por el tribunal de justicia del domicilio social.”

El mismo instrumento hace plena prueba que, en su artículo primero transitorio, los constituyentes convinieron que “Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) Raúl Ernesto Arellano Paz suscribe: 480 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de \$48.000.000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo, en el plazo de 6 mes(es) y en la siguiente forma: semestral. B) Mauricio Javier Salazar Durán suscribe: 760 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de \$76.000.000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo, en el plazo de 6 mes(es) y en la siguiente forma: semestral. C) Marcelo Osvaldo Caro Cubillos suscribe: 760 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de \$76.000.000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo, en el plazo de 6 mes(es) y en la siguiente forma: semestral. Así quedó establecido también en la escritura de modificación social de fecha 17 de marzo del año 2017, suscrita ante el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades, por don Raúl Ernesto Arellano Paz y don Mauricio Javier Salazar Durán.

Décimo sexto. Que sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la modificación social en el Registro de Empresas y Sociedades de fecha 21 de noviembre del año 2017, en su calidad de instrumento público en juicio, según el artículo 342 número 6 del Código de Procedimiento Civil, hace plena prueba – al tenor de lo dispuesto en el artículo 1700 del Código Civil – que, desde esa época, el único accionista de la sociedad por acciones SyC



Foja: 1

Gastronomía SpA es don Mauricio Javier Salazar Durán con 2.000 acciones, equivalentes al 100% del capital social; sin que haya constancia alguna de una nueva modificación social al respecto.

La mentada inscripción corresponde a lo acordado en la segunda junta extraordinaria de accionistas de SyC Gastronomía SpA, de fecha 13 de octubre del año 2017, protocolizada el día 20 del mismo mes y año, bajo el número 7175-2017 en el Repertorio de la Cuarta Notaría Pública de La Serena; cuya copia simple se acompañó por el demandante, sin que la contraria la hubiera objetado.

Décimo séptimo. Que de esta manera, probado está que el único accionista de dicha sociedad es el demandado, por lo que mal podría hacer extensivo al demandante la cláusula novena del estatuto social, en materia de resolución de conflictos; siendo procedente desechar la excepción de incompetencia incoada en autos.

II.4. De la acción de cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios.

Décimo octavo. Que la acción ejercida en autos es la dimanante del artículo 1489 del Código Civil, que prescribe que “En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios”. En este caso, el demandante ha optado por demandar el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios.

Décimo noveno. Que el fundamento de esta acción no es otro que el incumplimiento contractual del demandado, el que se ha definido como “el no pago de una obligación, esto es, la falta de satisfacción íntegra y oportuna al tenor de ella”. Valiéndose de los términos empleados por el artículo 1556 del Código Civil, habrá incumplimiento cuando la obligación no se cumple, se cumple imperfectamente o se retarda su cumplimiento (René Abeliuk, Las Obligaciones, Tomo II, quinta edición actualizada, p. 793).



Foja: 1

Vigésimo. Que, ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 1698 del Código Civil, corresponde al demandante probar la existencia del contrato cuyo incumplimiento denuncia y, en cuanto éste reviste los caracteres de contrato bilateral, probar que ha satisfecho sus obligaciones o que estaba llano a cumplirlas. Acreditado que sea lo anterior, el peso de la prueba se trasladará al demandado, quien debe acreditar que la obligación que se le imputa incumplida se encuentra pagada o extinta por alguno de los modos que prevé el artículo 1567 del Código Civil.

Vigésimo primero. Que a fin de acreditar la existencia del contrato cuyo incumplimiento se denuncia, el demandante acompañó a los autos una copia autorizada del documento protocolizado bajo el número de Repertorio N°6986-2017 en la Cuarta notaría Pública de La Serena, de fecha 12 de octubre del año 2017, consistente en la cesión de acciones de SyC Gastronomía SpA de Raúl Arellano Paz a Mauricio Salazar Duran, instrumento público en juicio de acuerdo al número 2 del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, que valorado según lo dispuesto en el artículo 1700 del Código Civil, acredita plenamente que en esa fecha el demandante cedió al demandado la cantidad de 480 acciones de serie única, que representaban el 24% del capital social y que, a su vez, correspondía al total de las acciones de don Raúl Arellano en aquella sociedad.

En la cláusula segunda, las partes convinieron que la cesión de las acciones se realizaría a partir de esa misma fecha y mediante la firma de dicha convención. A su vez, la transferencia de la propiedad se haría efectiva en la misma fecha por medio de la cesión en el Registro de Accionarios de la Sociedad, debidamente suscripto por las partes.

En cuanto al precio, éste ascendió a la suma de \$48.000.000, que el cesionario debía pagar, a más tardar, el día 12 de octubre de 2018.

Vigésimo segundo. Que, como ya se dijo, es requisito de procedencia que el demandante haya dado cumplimiento a su obligación o haya estado llano a ello, en atención a que el contrato cuyo incumplimiento se denuncia es bilateral. Al respecto, era obligación del cedente realizar la transferencia de las 480 acciones vendidas, en la forma convenida.



Foja: 1

En este caso, al tenor del contrato valorado en el considerando anterior, resulta palmario que la intención de las partes fue que “en esa misma fecha” –el 12 de octubre del año 2017 – se hiciera efectiva la tradición de las acciones “por medio de la cesión en el Registro de Accionarios de la Sociedad...”

Por aplicación de la regla de interpretación del artículo 1560 del Código Civil, ha de entenderse que cuando las partes refirieron hacer efectiva la transferencia “por medio de la cesión en el Registro...”, entendieron por esto, con “la anotación o inscripción en el Registro...”

Ahora bien, el demandado defiende que ello nunca ocurrió, de manera que don Raúl Arellano no habría dado cumplimiento a su obligación, al tenor del contrato.

El asunto es que la segunda junta extraordinaria de accionistas de SyC Gastronomía SpA, protocolizada el día 20 de octubre de 2017, bajo el número 7175-2017 en el Repertorio de la Cuarta Notaría Pública de La Serena y la inscripción de dicha modificación social, del 21 de noviembre del año 2017, en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía -valoradas en el considerando décimo sexto del fallo-, hacen plena prueba del hecho que don Mauricio Salazar Duran suscribió la segunda junta extraordinaria de accionistas el 13 de octubre del año 2017 y declaró asistir a la misma con un total de 2.000 acciones, equivalentes al 100% del capital social. En ella declaró “la sociedad tiene un capital \$200.000.000 dividido en 2.000 acciones, de las cuales 480 acciones pertenecían a don Raúl Ernesto Arellano Paz y 1.520 acciones a Mauricio Javier Salazar Durán, [...] que por instrumento privado de fecha 12 de octubre de 2017, otorgado ante el Notario Público de esta ciudad [...] don Raúl Ernesto Arellano Paz, vendió, cedió y transfirió el 100% de las acciones que poseía a don Mauricio Javier Salazar Durán, retirándose de la sociedad. Consecuencialmente, la sociedad quedó conformada por el accionista don Mauricio Javier Salazar Durán con 2.000 acciones (sic)”. Así también quedó establecido en nuevo estatuto social registrado en fecha 21 de noviembre de 2017, en el respectivo Registro de Empresas y Sociedades.



Foja: 1

Vigésimo tercero. Que en razón de los hechos acreditados en el considerando anterior, es palmario que el demandado compró y adquirió las 480 acciones del demandante, comportándose como único accionista de la sociedad por acciones y declarando en un instrumento público dicha calidad. Así, parece contrario a la buena fe contractual y a la teoría de los actos propios pretender que el demandante no realizó la tradición de las mismas; debiendo entender esta sentenciadora, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1546 y 1564 inciso final del Código Civil, que don Raúl Arellano Paz dio cumplimiento a su obligación de efectuar la tradición o dar la cosa vendida.

En consecuencia, se rechaza la excepción de contrato no cumplido opuesta por el demandado.

Vigésimo cuarto. Que siguiendo con el análisis de los requisitos de la acción, resulta que, habiéndose probado la existencia de la obligación y que el actor es un contratante diligente, es carga del demandado probar el cumplimiento de la suya, todo lo cual no hizo; por el contrario, confesó en audiencia del 23 de diciembre de 2019 - a la pregunta cinco del pliego de posiciones -, cómo es efectivo que no pagó los \$48.000.000 en la época convenida, ni tampoco después.

Vigésimo quinto. Que habiéndose estipulado una época para el cumplimiento de la obligación de pago, sin que esto haya ocurrido, es dable entender que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1551 número 1 del Código Civil, don Mauricio Salazar Durán está en mora.

Vigésimo sexto. Que, por otra parte, al tenor de lo previsto en el inciso tercero del artículo 1547 del Código Civil, el incumplimiento descrito en los considerandos anteriores se presume culpable, no habiendo probado el demandado su diligencia o cuidado.

Vigésimo séptimo. Que corresponde analizar ahora si el incumplimiento del deudor causó al demandante los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que refiere en su libelo.



Foja: 1

Vigésimo octavo. Que el artículo 1556 del Código del ramo prevé que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, proveniente de no haberse cumplido la obligación o haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento

Vigésimo noveno. Que el señor Alessandri R. definió el daño emergente como “la pérdida efectiva experimentada por el acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación, o del cumplimiento imperfecto o tardío de ella; es el empobrecimiento efectivo, la disminución real del patrimonio que el acreedor sufre a consecuencia del incumplimiento de la obligación. Por eso se le llama daño emergente, porque es algo que sale o emerge del patrimonio” “En otros términos, podría decirse: el daño emergente es la privación que sufre el acreedor al no incorporar a su patrimonio el objeto mismo de la obligación, objeto que para los fines de la indemnización se sustituye por su valor equivalente en metálico” (C. de Ap. de Talca, 10 de junio de 1933, considerando cuarto 4º; diccionario jurídico disponible en www.centrodocumental.pjud.cl).

Trigésimo. Que al tenor de dicha definición y de la disposición legal citada, y probado en juicio el no pago del precio en el plazo convenido –la suma de \$48.000.000 con vencimiento el día 12 de octubre del año 2017-, es dable concluir que el incumplimiento contractual de Mauricio Salazar causó a Raúl Arellano un empobrecimiento efectivo, consistente en no haber ingresado a su patrimonio la mentada cantidad, a pesar de haber transferido a la contraria las acciones vendidas.

Por esta razón, procede conceder por concepto de indemnización de perjuicios por daño emergente la suma de \$48.000.000 (cuarenta y ocho millones de pesos).

Trigésimo primero. Que el actor también alega haber experimentado lucro cesante, consistente en que le fue vedada la posibilidad de obtener los ingresos de la sociedad “SyC Gastronomía SpA”, suma que según información contable de la empresa ascendería a un promedio líquido de \$150.000.000 anual.



Foja: 1

Trigésimo segundo. Que sobre el lucro cesante Daniel Peñailillo Arévalo ha señalado que “[...] el concepto puede ser formulado mediante varias expresiones, equivalentes y breves; las más repetidas son: ganancia esperada, ganancia frustrada, pérdida de ganancia. Sobre esa base podemos decir que mientras el daño emergente es la pérdida sufrida el lucro cesante es la ganancia esperada que no se obtuvo debido al incumplimiento del contrato o al hecho dañino.” (Peñailillo-Arévalo, Daniel. (2018). Sobre el Lucro Cesante. Revista de derecho (Concepción), 86(243), 7-35. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-591X2018000100007>)

Trigésimo tercero. Que los documentos exhibidos por el demandado en audiencia de fecha 12 de diciembre del año pasado, agregados a los autos como medida para mejor resolver, específicamente, los balances generales de la sociedad SyC Gastronomía SpA., correspondientes a los años tributarios 2016, 2017 y 2018, no objetados por las partes, permiten presumir de forma grave, precisa y concordante –según lo dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil- que el promedio de utilidad líquida de la sociedad, durante esos tres años, ascendió a la suma de \$762.940.745, considerando que durante el año 2016 se generó una utilidad líquida de \$35.509.714; el año 2017, \$1.173.393.453; y el 2018, \$1.079.919.070.

Trigésimo cuarto. Que sobre la base expuesta en el considerando anterior y teniendo en cuenta que el capital social asciende a un total de 2.000 acciones, de las cuales al actor correspondían 480, es posible colegir que la participación demandante en la sociedad y en las utilidades que ésta pudiera generar equivaldría a un 24%.

Haciendo una operación aritmética se concluye que del promedio anual de utilidades líquidas de la empresa, por un total de \$762.940.745, a don Raúl Arellano Paz habría correspondido a una utilidad promedio anual ascendente a \$183.105.778, según su porcentaje de participación accionaria.

Trigésimo quinto. Que respecto a la certeza y actualidad que debe reunir el daño para que sea indemnizable, es menester precisar, en cuanto al lucro cesante, que “Ha de pedirse, pues, un razonable grado de certeza,



Foja: 1

equivalente a una sólida probabilidad, que se traduce en una composición de los extremos y que se reflejará en la prueba. Por una parte, se excluirá un detallado rigor, sobre todo en la fijación de la cuantía; y, por otra, evitando proposiciones antojadizas o notoriamente aleatorias en su existencia (“sueños de ganancia”, como han dicho algunas sentencias) se deberán probar elementos objetivos que permitan desprender verosímilmente un curso (futuro) normal sobre la base de una ganancia hasta ahora producida.” (Peñailillo-Arévalo, Daniel. (2018); Ob. Cit)

Trigésimo sexto. Que según lo razonado en los considerandos anteriores, resulta probado entonces que al transferir la totalidad de sus acciones en la sociedad (480) y al no recibir el pago de las mismas el actor dejó de percibir una legítima utilidad a la tenía derecho, experimentando un perjuicio cierto, catalogado de lucro cesante.

A fin de determinar la cuantía de este daño se estará a la época del incumplimiento contractual, el 12 de octubre del año 2017, y al tiempo de presentarse la demanda, el 1 de julio del año 2019, concluyendo que durante ese lapso transcurrió, con certeza, un año completo; periodo durante el cual don Raúl Arellano Paz dejó percibir las ganancias de su participación en la sociedad SyC Gastronomía SpA, en un porcentaje del 24% de las utilidades líquidas totales, es decir, la suma de \$183.105.778.

Sin perjuicio del cálculo anterior, y a fin de no incurrir en el vicio procesal de conceder más de lo pedido, cabe hacer presente que el demandante pide por este concepto indemnizatorio la suma de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), cantidad, ésta, en la que esta sentenciadora avalúa el lucro cesante y por la cual procede otorgar la misma.

Trigésimo séptimo. Que corresponde analizar ahora la indemnización del daño moral que pretende el actor, fundado en que la no percepción del precio provocó que entrara en cesación de pagos con diversos acreedores, especialmente del área bancaria, lo que se ha traducido en que exista un sinnúmero de juicios ejecutivos en su contra; corriendo el riesgo de perder el hogar donde vive con su mujer y sus hijos e ingresando al



Foja: 1

registro de DICOM; esto le habría causado malestares que lo han obligado a asistir a controles médicos, físicos y mentales, pues su salud se ha visto gravemente deteriorada, incluso a niveles psiquiátricos, cursando actualmente un cuadro de depresión mayor.

Trigésimo octavo. Que sin perjuicio que el daño moral parece no ser indemnizable en sede contractual, al tenor del artículo 1556 del Código Civil –que aparentemente limita la indemnización de perjuicios al puramente patrimonial-, cierto es que la jurisprudencia y doctrina nacional se ha inclinado en las últimas décadas por dar lugar al mismo, contestando “[...] que el precepto citado no niega la reparación del daño moral así como ninguna norma lo hace. Luego, agrega, esta división entre daño emergente y lucro cesante no puede excluir la reparación amplia, pues esta clasificación solo atiende a la actualidad o futuridad del perjuicio en cuanto a su ocurrencia. Con todo, la ley no ha prohibido invocar el daño moral en un estatuto resarcitorio diverso del extracontractual. Aun más, precisamente la reinterpretación de la antedicha disposición ha servido de sustento tanto a la doctrina como a la jurisprudencia para argumentar en favor del daño moral derivado del contrato, en el entendido que la referencia al «daño emergente» allí contenida, y cuya definición no ha sido dada por el legislador, comprende no solo el daño patrimonial sino también el extrapatrimonial.” (Rutherford Parentti, Romy Grace. (2013). La reparación del daño moral derivado del incumplimiento contractual: Tendencia en la reciente jurisprudencia nacional y española. Revista chilena de derecho, 40(2), 669-689. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372013000200012>).

Trigésimo noveno. Que el daño moral tradicionalmente se ha entendido como aquél que afecta los atributos o facultades morales o espirituales de una persona; como el dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito, sea por una herida, la muerte de una persona querida, una ofensa a su dignidad u honor, etc. (René Abeliuk, Las Obligaciones, Tomo I, Quinta Edición actualizada, p.250).

Se le ha definido también como “todo aquel menoscabo no susceptible de evaluación pecuniaria”, haciéndolo sinónimo de daño no



Foja: 1

patrimonial y expandiéndolo para cubrir intereses serios de la víctima, con una compensación que neutralice o atenúe el dolor ocasionado, la que normalmente es de carácter económico.

Cuadragésimo. Que el informe pericial reseñado en el considerando undécimo del fallo, proporciona un estudio acabado de las particularidades psicológicas del demandante –basada en información científicamente recabada por una profesional del área – y entrega conclusiones lo suficientemente claras y bien fundadas, como para tener por acreditado, según las reglas de la sana crítica racional, que don Raúl Arellano Paz experimentó el sufrimiento y aflicción que describe en su libelo -depresión reactiva, severa, problemas de ansiedad e inseguridades- y que esto se debió al incumplimiento contractual analizado en el caso sub lite; en palabras de la psicóloga “[...] la sensación de injusticia, frustración e impotencia deriva directamente de la exclusión de su participación pese a haber aportado todo su capital y sin recibir a la fecha el pago de las acciones que vendió.”

Cuadragésimo primero. Que, así las cosas, habiéndose probado la existencia de daño moral causado por el actuar negligente del demandado, esta sentenciadora debe determinar la cuantía de su compensación de acuerdo a prudencia y equidad, avaluando éste en la suma de \$2.000.000 (dos millones de pesos).

Cuadragésimo segundo. Que por lo razonado en los considerandos anteriores, concurriendo todos y cada uno de los requisitos señalados, procede acoger la demanda de cumplimiento forzado de contrato con indemnización de perjuicios interpuesta por Raúl Arellano Paz contra Mauricio Salazar Durán, en lo principal de su libelo.

Cuadragésimo tercero. Que las sumas concedidas a título de daño emergente y lucro cesante deberán reajustarse según la variación semestral que experimente el IPC, desde la fecha en que el demandado incurrió en mora, el 12 de octubre del año 2017, hasta la fecha de su pago efectivo.

Por su parte, la cantidad concedida a título de daño moral, se reajustará según el mismo índice, pero aplicado desde que la presente sentencia quede firme y hasta la fecha de su pago efectivo.



Foja: 1

Cuadragésimo cuarto. Que los demás antecedentes probatorios, no valorados en los considerandos anteriores, en nada alteran lo resuelto precedentemente, siendo innecesario proceder a su análisis.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1489, 1545, 1546, 1547, 1551, 1552, 1556, 1698, 1700 y 1712 del Código Civil, artículos 1, 144, 158, 160, 170, 254, 341, 342, 358 y 398 del Código de Procedimiento Civil, y demás normas legales citadas, se resuelve:

1°.- Que **se acogen** las tachas formuladas por el demandado en audiencia de fecha 28 de noviembre del año 2019; contra los testigos Pablo Ramírez Inostroza y Enzo Cerda Albornoz.

2°.- Que **se rechaza** la excepción de incompetencia formulada por el demandado, en lo principal del escrito de fecha 2 de octubre del año 2019.

3°.- Que **se rechaza** la excepción de contrato no cumplido opuesta por el demandado, en lo principal del escrito de fecha 2 de octubre del año 2019.

4°.- Que **se acoge** la demanda de cumplimiento forzado de contrato con indemnización de perjuicios interpuesta en lo principal de la presentación de fecha 1 de julio del año 2019, rectificada el día 4 del mismo mes, por don Raúl Ernesto Arellano Paz contra don Mauricio Javier Salazar Duran. En consecuencia, se condena al demandado a pagar las cantidades señaladas en los considerandos trigésimo, trigésimo sexto y cuadragésimo primero del fallo; todas, con los reajustes indicados en el motivo cuadragésimo tercero.

5°.- Que se condena al demandado a pagar las costas de la causa.

Regístrese, anótese y notifíquese a las partes.



**PRONUNCIADA POR CECILIA ROJAS NOGEROL,
JUEZ TITULAR.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **La Serena, diecinueve de Marzo de dos mil veinte**

